



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Radicado No. 20241700406941

Fecha: 22-08-2024

20241700406941

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

170

Doctor:

DAVID GARZÓN FANDIÑO

Subsecretario

Comisión Segunda Permanente de Gobierno

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

Concejo de Bogotá, D.C.

Calle 36 No. 28A - 41

Bogotá, D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 23-08-2024 12:02:04
2024ER19231 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO/GUSTAVO QUINTERO AVIL
DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A
ASUNTO: COMEN TARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PA575 Y 603 DE
OBS: RECIBIDOS EL DÍA 22-08-2024

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No. Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Comentarios de la Administración Distrital para primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 603 de 2024.

Respetado Subsecretario:

De conformidad con lo señalado en el Capítulo III del Decreto Distrital 438 de 2019, los sectores, Educación (Coordinador), y Gestión Jurídica, a través de las entidades correspondientes, elaboraron comentarios para primer debate en relación con el Proyecto de Acuerdo No. 603 de 2024 " *“Por medio del cual se crea la figura de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad en el distrito”*

Con fundamento en los comentarios de carácter jurídico, técnico y presupuestal, emitidos por las entidades mencionadas (ver anexos), la Administración Distrital considera que la iniciativa analizada No es viable.


No obstante, en caso de requerir información adicional sobre el particular, lo invito a comunicarse con la Dirección de Relaciones Políticas, al teléfono 3820660 Ext. 1702 y 1704


Cordialmente,



JUAN BELLO GONZÁLEZ
Director de Relaciones Políticas
juans.bellog@gobiernobogota.gov.co

Anexos: Uno (16 folios en formato *.pdf).

Copias: Concejales Juan Daniel Oviedo(Autor) , José del Carmen Cuesta Novoa (Coordinador) y Juan Javier Baena Merlano (ponente)

Proyecto: Laura Camila Gálvez Trujillo – Profesional Universitario Contratista DRP 

Revisó: Viviana Turriago Mejía - Profesional Universitaria DRP 

Aprobó: Julián Arévalo Pedraza – Profesional Especializado Contratista DRP 

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI-GPD-F032
Versión: 07
Vigencia: 24 de enero de 2024
Caso HOLA: 12936



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

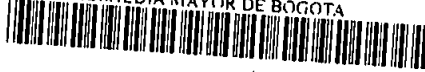
Secretaría de Gobierno Distrital

R No. 2024-421-264102-2

2024-08-20 08:22 - Folios: 1 Anexos: 3

Destino: DIRECCION DE RELACIONES P

Rem/D: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ



SECRETARÍA JURÍDICA - ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ

Rad. No.: 2-2024-11192

Fecha: 16/08/2024 11:27:31

Destino: SECRETARÍA DISTRITAL DE
GOBIERNO

Copia: S

Anexos: 3 FOLIOS



2310460
Bogotá, D.C.

Doctor

JUAN BELLO GONZÁLEZ

Director de Relaciones Políticas

Correo: radicacionsdg.nivelcentral@gobiernobogota.gov.co

Secretaría Distrital de Gobierno

Calle 11 No. 8 - 17

Ciudad

Asunto: Respuesta oficio No. 20241700390211 - Solicitud de pronunciamiento para Primer Debate al Proyecto de Acuerdo No. 603 de 2024.

Rad. 1-2024-13484.

Respetado doctor Bello:

Esta secretaría recibió el oficio referenciado en el asunto, mediante el cual solita la emisión de comentarios para primer debate del proyecto de acuerdo No. 597 de 2024, *"Por medio del cual se crea la figura de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad en el Distrito"*.

Al respecto, se realizó el pronunciamiento requerido en el formato establecido para tal fin, el cual se adjunta al presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE PUENTES DÍAZ

Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos (e)

C.C. Doctora Ana María Cadena - Secretario Distrital de Hacienda - Carrera 30 No. 25-90 - con anexos: Pronunciamiento en 3 folios.

Anexos: Pronunciamiento en 3 folios.

Proyectó: Silvia Aponte Penso - Profesional especializado - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.
Revisó y aprobó: Andrés Felipe Puentes Díaz - Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos (e).

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotaajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311520-FT-019 Versión 02

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE ACUERDO

SECTOR QUE CONCEPTÚA: Gestión Jurídica

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 603 AÑO: 2024

TÍTULO DEL PROYECTO

"Por medio del cual se crea la figura de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad en el Distrito".

AUTOR (ES)

Concejal Juan Daniel Oviedo Arango - Partido Político Liberal.

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

En términos de la exposición de motivos la iniciativa tiene como objeto:

"Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los y las estudiantes con discapacidad hasta educación media, de manera que les sea posible su desempeño adecuado en sus actividades de formación educativa, sin discriminación, hostigamiento ni violencias."

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA

ES COMPETENTE

SÍ ☐ NO ☒

Se invoca en el citado proyecto, como facultad del Concejo Distrital para expedir la iniciativa, el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 en el cual dispone:

"Artículo. - 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley:

- 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...)"*

Respecto dicho numeral 1, cabe señalar que si bien es una competencia general, la misma tiene unos límites, según la cual, el Concejo de Bogotá, se encuentra facultado para dictar las normas generales que se consideren necesarias en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le corresponde desarrollar al ente territorial, buscando garantizar la eficiente prestación de los servicios a cargo de la ciudad, sin que se invadan competencias otorgadas legalmente a otras autoridades.

Así pues, al establecerse en el proyecto de acuerdo medidas de carácter administrativo, se encuentra que se estaría desconociendo el componente operativo de la prestación de los servicios que corresponde al alcalde mayor, quien ostenta la facultad de regular la forma en que se materializa la gestión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 38° del Decreto Ley 1421 de 1993, que prevé que el Alcalde dirige la acción administrativa en el Distrito Capital.

ANÁLISIS JURÍDICO

El análisis del Proyecto de Acuerdo 603 de 2024, se dividirá en los siguientes ítems: 1. Competencias generales del Concejo de Bogotá, 2. Análisis y consideraciones sobre el Proyecto de Acuerdo y 3. Conclusión.

1. Competencias generales del Concejo de Bogotá, D.C.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Concejo de Bogotá, es competente para presentar la iniciativa, teniendo presente que se encuentra facultado para dictar las normas generales que se consideren necesarias en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le corresponde desarrollar al ente territorial, buscando garantizar la eficiente prestación de los servicios a cargo de la ciudad.

En relación con la naturaleza y/o el carácter general de las normas de competencia en su expedición, por parte del Concejo de Bogotá, es válido acotar que el Consejo de Estado ha sostenido:

"De manera acorde con este marco general, la Constitución reconoció expresas facultades normativas a los Concejos Municipales en ámbitos cruciales de la vida local. Así, por ejemplo, según el artículo 313 de Constitución Política, les corresponde reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (numeral 1.º), (...). En virtud de estas atribuciones, dado el carácter político administrativo de estas corporaciones, sus decisiones, los acuerdos municipales, tienen el carácter de reglamentos, esto es, actos jurídico administrativos de contenido normativo y, por ende, de carácter general, impersonal y abstracto, cuya fiscalización ha sido confiada a la justicia contencioso administrativa. (...)"¹.

2. Análisis y consideraciones sobre el Proyecto de Acuerdo.

El artículo 1 del Proyecto de Acuerdo, pretende la creación de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad, **adscrita al despacho de la Secretaría de Educación Distrital.**

¹Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia del 15 de septiembre de 2016, rad. No. 25000-23-24-000-2007-90177-01.

En el artículo 2 se consagran las definiciones de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, discriminación por motivos de discapacidad y de ajustes razonables, las cuales se encuentran definidas en los artículos 2 de las Leyes 1346 de 2009 y 1618 de 2013.

Por su parte, en el artículo 3 de la iniciativa, se señalan los principios que regirán las actuaciones de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad.

En tanto, en el artículo 4 de la iniciativa, se dispone que la función de defensor, será ejercida por una persona que se desempeñe como asesor del despacho, designada por el Secretario/a de la Secretaría de Educación, **adicionando que el defensor tendrá a su cargo un equipo de soporte**, en los términos del principio de progresividad previsto en el numeral 6 del artículo 3 del proyecto de acuerdo.

En el párrafo de dicho artículo, se dispone que la persona defensora hará parte del comité técnico de discapacidad, del Consejo Distrital de Discapacidad y de las demás instancias que implementen acciones de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida para las personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 505 de 2012.

En el artículo 5, se detallan las funciones de la defensoría de las y los estudiantes, encontrándose entre ellas, garantizar la restitución de los derechos de los estudiantes con discapacidad, identificar las principales barreras de acceso a derechos que enfrentan los y las estudiantes con discapacidad y adelantar gestiones para su progresiva eliminación, articular con la Escuela de Padres, Madres y Personas Cuidadoras, lo relacionado con los contenidos relevantes para el logro de un entorno educativo inclusivo y respetuoso de estudiantes con discapacidad, coordinar con la oficina de convivencia escolar, la atención de violencias, protocolos y rutas de restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, en el artículo 6 se prevé que la defensoría de las y los estudiantes, en coordinación con las Secretarías Distritales de Planeación e Integración Social, adelantarán las gestiones necesarias para garantizar que el Registro Social de Hogares de la Secretaría de Planeación, tenga un marcador poblacional que permita identificar a la población con discapacidad certificada y no certificada, disponiendo que dicho marcador poblacional podrá construirse con base en registros ya existentes de nivel nacional y distrital, como el Sistema de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad y además, debe cumplir con los requerimientos técnicos y metodológicos, y requisitos internacionales de producción de información estadística.

En ese sentido, se encuentra que, en términos generales con lo dispuesto en dichos artículos, se está desconociendo el componente operativo de la prestación de los servicios que corresponde al alcalde mayor, quien ostenta la facultad de regular la forma en que se materializa la gestión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 38° del Decreto Ley 1421 de 1993, que prevé que el alcalde dirige la acción administrativa en el Distrito Capital.

Sobre el particular, es oportuno indicar que, si bien es cierto, el proyecto de acuerdo establece en su epígrafe que *"En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 313 numeral 1° de la Constitución Política, el artículo 12 numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993"*, lo cierto es que el Concejo de Bogotá no es competente para presentar la iniciativa, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, que dispone:

"Artículo. - 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario.

Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior... El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde".

En ese orden de ideas, es claro que la competencia para presentar la iniciativa es del Alcalde Mayor, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que prevé: "(...) **Determinar la estructura general de la administración Central, las funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleo**". (Subrayado fuera de texto).

En efecto, la iniciativa propuesta también busca modificar la estructura de la administración distrital, tal como surge de las disposiciones contenidas en el proyecto de acuerdo y en especial de los artículos 1 y 4, que ordena en su orden: **crear la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad, adscrita al despacho de la Secretaría de Educación Distrital**, la función de defensor, será ejercida por una persona que se desempeñe como asesor del despacho, designada por el Secretario/a de la Secretaría de Educación, **que tendrá a su cargo un equipo de soporte**, claramente se enmarca dentro de las iniciativas contempladas en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 ya citado, que reserva tal tipo de proyectos a iniciativa exclusiva del Alcalde Mayor.

Así las cosas, si bien el Concejo tiene la competencia y responsabilidad constitucional de establecer las políticas públicas que deben orientar la gestión administrativa (como lo puede ser definir acciones orientadas a la defensa de población estudiantil en condición de discapacidad), la delimitación de las funciones de la Administración Distrital, por disposición del referido estatuto orgánico de Bogotá recaen exclusivamente en el Alcalde Mayor.

4. Conclusión.

De conformidad con el análisis efectuado, se concluye que el Concejo de Bogotá, no tiene la competencia para presentar el Proyecto de Acuerdo 603 de 2024.

ANÁLISIS TÉCNICO

No se realiza análisis técnico, toda vez que según el 17 del Decreto Distrital 438 de 2019, el mismo corresponde en particular al sector designado como coordinador.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

No se sugiere modificaciones al articulado, considerando que el Concejo de Bogotá no es competente para presentar y aprobar la iniciativa No. 603 de 2024.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

Sí _____ No _____

No se efectúa estudio de los gastos que pueda generar la implementación y ejecución de la iniciativa, toda vez, que según el numeral 3 del artículo 17 del Decreto Distrital 438 de 2019, corresponde a los sectores y en particular al sector coordinador.

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta de generación de gastos indique ese gasto adicional a que corresponde.

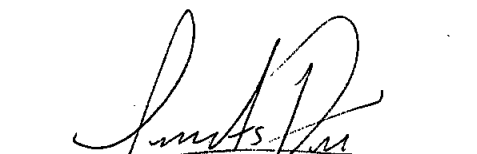
VIABILIDAD DEL PROYECTO:

Sí _____ No _____

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Distrital 438 de 2019, el sector coordinador será el responsable de pronunciarse sobre la viabilidad final del proyecto.

Cordialmente,


ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Subsecretaria Jurídica Distrital


ANDRÉS FELIPE PUENTES DÍAZ
Director Distrital de Doctrina y
Asuntos Normativos (e)

Proyectó: Silvia Aponte Penso - Profesional especializado - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.

Revisó: Estífer Pinilla Serrano - Profesional Especializado - Subsecretaría Jurídica Distrital.

Revisó: Andrés Felipe Puentes Díaz - Director Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos (E)

Aprobó: Angélica María Acuña Porras - Subsecretaria Jurídica Distrital

Bogotá, D.C, agosto de 2024

Doctor
JUAN SEBASTIÁN BELLO GONZÁLEZ
Director de Relaciones Políticas
Secretaría Distrital de Gobierno
Calle 11 No. 8 -17
Ciudad

Ref.: Concepto del Proyecto de Acuerdo 603 de 2024
Radicado SED E-2024-121788
Radicado Secretaría Distrital de Gobierno 20241700390201

Respetado doctor Bello, reciba un cordial saludo.

En respuesta a la solicitud en referencia: Proyecto de Acuerdo 603 de 2024 *“Por medio del cual se crea la figura de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad en el Distrito”*, se remite el análisis, jurídico, técnico, financiero y algunas sugerencias en calidad de aporte a la discusión en el formato único para emisión de concepto a Proyectos de Acuerdo.

FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACUERDO

ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Secretaría de Educación del Distrito

NÚMERO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 603 de 2024

TÍTULO DEL PROYECTO

“Por medio del cual se crea la figura de la defensoría de las y los estudiantes con discapacidad en el Distrito”.

AUTOR (ES)

Honorable Concejal Juan Daniel Oviedo Arango perteneciente a la Bancada del Partido Con Toda por Bogotá.

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los y las estudiantes con discapacidad hasta educación media, de manera que les sea posible su desempeño adecuado en sus actividades de formación educativa, sin discriminación, hostigamiento ni violencias.

COMPETENCIA LEGAL PARA PRESENTAR LA INICIATIVA ANÁLISIS POR PARTE DEL SECTOR COORDINADOR

1. ¿El articulado tiene unidad de materia?

Respuesta: Sí.

2. ¿El epígrafe es concordante con el articulado del proyecto?

Respuesta: Sí.

3. ¿La materia del proyecto se enmarca dentro de las atribuciones invocadas para su expedición?

Respuesta: El Concejo de Bogotá es **competente parcialmente** para presentar la iniciativa, teniendo en cuenta el marco legal que regula sus facultades, así:

Constitución Política

Artículo 313. *Corresponde a los Concejos:* Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

Decreto Ley 1421 de 1993

Artículo 8. Funciones Generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.

Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley:

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito (...)
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.

Para el presente caso, es pertinente citar las facultades asignadas al Alcalde mayor

Artículo 38. Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor:

6ª Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (...)

9ª Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado (Subrayado fuera de texto).

4. ¿El proyecto invade competencias de otras autoridades?

Respuesta: sí, la iniciativa legislativa crea un cargo de nivel asesor, señala sus funciones especiales, crea un equipo de soporte para dicho asesor, modifica la conformación del Comité Técnico de Discapacidad, así como del Consejo Distrital de Discapacidad, y de las demás instancias que implementen acciones de inclusión social y mejoramiento de la

calidad de vida para las personas con discapacidad, temas que son de la órbita del Alcalde Mayor.

5. ¿El Contenido y la materia a regular está ajustado al marco constitucional y legal vigente?

Respuesta: No.

ANÁLISIS JURÍDICO

1. MARCO JURÍDICO

1.1. NORMAS INTERNACIONALES.

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006

1.2. Constitución Política

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, **la educación** y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (...)

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (...).

1.3. Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación

Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

- El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
- La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad (...).

1.4. **Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”**

1.5. **Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”**

Artículo 11. Derecho a la Educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población con discapacidad. (...)

1.6. **Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad” - compilado en el Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación**

Artículo 2.3.3.5.2.1.2. Ámbito de aplicación. La presente sección aplica en todo el territorio nacional a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación Nacional, entidades territoriales, establecimientos educativos de preescolar, básica y media e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado. Igualmente, aplica a las entidades del sector educativo del orden nacional como: Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Instituto Nacional para Sordos (Insor) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Artículo 2.3.3.5.2.1.3. Principios. La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia con las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los fines de la educación previstos en la Ley 115 de 1994.

Artículo 2.3.3.5.2.3.2. Oferta educativa pertinente para personas con discapacidad. Para garantizar una educación pertinente y de calidad, las entidades territoriales certificadas

organizarán la oferta educativa que responda a las características de las personas con discapacidad identificadas en su territorio, siguiendo las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, así: (...)

Artículo 2.3.3.5.2.3.3. Acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, las entidades territoriales certificadas garantizarán a las personas con discapacidad el ingreso oportuno a una educación con calidad y con las condiciones básicas y ajustes razonables que se requieran, sin que la discapacidad sea causal de negación del cupo. Para ello, se deberá adelantar el siguiente proceso: (...)

1.7. Acuerdo 505 de 2012 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 137 de 2004, “Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999” Modificado por el art. 9, Decreto Distrital 548 de 2016.

Artículo 1. El Sistema Distrital de Discapacidad en el Distrito Capital (SDD), es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, instituciones y procesos sociales y comunitarios que permiten la puesta en marcha de los principios de la política pública de discapacidad para el Distrito Capital consagrados en el Decreto 470 de 2007 y actúa como el mecanismo de coordinación, asesoría y articulación de los diferentes actores sociales e instituciones que intervienen en la atención de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores a través de la planificación, ejecución, seguimiento y control social en el marco de los derechos humanos.

1.8. Acuerdo 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024 - 2027 “Bogotá Camina Segura”

Artículo 5. *Objetivos estratégicos. El presente plan se estructura en torno a los siguientes objetivos estratégicos:*

5.3. Bogotá confía en su potencial: Bogotá debe ser una ciudad en la que todos y todas podamos desarrollar y aprovechar al máximo nuestro potencial como personas, familias, empresas, academia y sociedad. Esto requiere consolidar a Bogotá como una ciudad del conocimiento, educada y competitiva, mediante el acceso a bienes y servicios -públicos y privados-, que brinden oportunidades de desarrollo para todos y todas. Una ciudad que adopta la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) como motor para el desarrollo de los ecosistemas empresariales, de alta productividad y de emprendimiento, que se alinean con las vocaciones individuales fomentadas desde la niñez y del territorio. Para ello, Bogotá estará soportada en un ambiente que estimula la generación y apropiación social del conocimiento.

Artículo 12. *Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”.* Adóptense los siguientes programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”:

12.1. Programa 16. Atención integral a la primera infancia y educación como eje del potencial humano.

(...) De igual forma, se garantizará el correcto funcionamiento de los colegios oficiales, para lo cual se realizará una adecuada gestión del talento humano (docente y administrativo) y de los servicios administrativos que brindan soporte a la operación de las instituciones educativas, con criterios de eficiencia y calidad. Se fortalecerá el programa de bienestar escolar para los y las estudiantes y la atención de las necesidades de las poblaciones de especial protección constitucional como niñas y niños con discapacidad, con capacidades excepcionales o de grupos étnicos, entre otros. En términos de avanzar en las coberturas y matrículas en tiempo, se fortalecerá el sistema para estos procesos y se continuará implementando una estrategia de búsqueda activa con el fin de identificar y localizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar que se encuentran por fuera del sistema educativo oficial.

1.9. Decreto Distrital 089 de 2023 "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para Bogotá D.C. 2023-2034"

Artículo 1. Objeto. Adoptar la Política Pública de Discapacidad para Bogotá D.C. 2023-2034, que busca garantizar el goce efectivo de los derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad en el territorio urbano, rural y disperso de Bogotá D.C. para el periodo comprendido entre 2023 y 2034.

Artículo 10. Eje Uno. Garantía de Derechos para la inclusión. Se define como el conjunto de medidas adoptadas para el desarrollo de capacidades, la atención integral, la participación, la representación y la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, en términos de igualdad y equidad. (...)

Componente 2: Inclusión y equidad en educación:

El componente de inclusión y equidad en educación se fundamenta en que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, en la zona urbana, rural y dispersa de Bogotá, en cumplimiento de las trayectorias educativas completas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial e interseccional, en condiciones de acceso, accesibilidad, permanencia, participación, progreso, calidad, pertinencia y oportunidad; en línea con el proyecto de vida de la persona con discapacidad, en observancia del principio de autonomía.

2. ANÁLISIS JURÍDICO

Para la Oficina Asesora Jurídica de la SED, aunque la finalidad del proyecto de acuerdo es loable, **es jurídicamente inviable** en atención a las siguientes razones:

- La Ley 115 de 1994 consagra en el artículo 1 que el proceso educativo es un ejercicio constante que se desarrolla en distintos escenarios e involucra múltiples actores, que contribuyen a la *"formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta*

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, y entre sus fines, en el artículo 5, considera importante desarrollar “el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”.

- Corresponde al Estado no solo prestar y garantizar el servicio público/derecho fundamental de educación en condiciones plenas de calidad, sino que se debe procurar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema; lo anterior, se realiza a través de la identificación de necesidades y la implementación de políticas públicas que atiendan esas necesidades.
- De conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por lo cual, el Estado ha propendido por garantizar la prestación de los servicios públicos de una manera equitativa, reduciendo la brecha que existe a raíz de las condiciones de discapacidad que presentan algunas personas que hacen parte de la sociedad.

En virtud a lo anterior, en el marco de las responsabilidades que le asigna las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, la Secretaría de Educación: (i) lidera políticas y genera orientaciones y lineamientos para los establecimientos educativos, con el propósito que personas con o sin discapacidad puedan compartir los mismos espacios de formación académica, generando la inclusión y cumplimiento con el requisito de adaptabilidad que rige este valioso servicio, por lo cual las Instituciones de Educación del Distrito de Bogotá brindan un servicio integral; y, (ii) busca garantizar los derechos fundamentales de los estudiantes, a fin de reducir la diferenciación y la discriminación de la población que presenta alguna discapacidad, para lo cual esta entidad ha venido atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017 *“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”*, a fin de garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de los estudiantes con discapacidad cursando trayectorias educativas completas.

- Respecto a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Proyecto de Acuerdo, donde se crea un nuevo cargo de nivel Asesor, adscrito al despacho de la Secretaría de Educación del Distrito, la creación de un equipo de soporte, así como lo estatuido en el artículo 5, donde se señalan las funciones de dicho Asesor, quien fungiría como defensor de las y los estudiantes con discapacidad, al igual que su inclusión obligatoria en el Comité Técnico de Discapacidad, el Consejo Distrital de Discapacidad y demás instancias que implementen acciones de inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida para las personas con discapacidad, es procedente indicar que la creación de empleos de la administración central, la asignación de funciones concretas a un empleo determinado, así como la asignación de funciones a entidades públicas es un

asunto de competencia del Alcalde/sa Mayor de Bogotá, según lo previsto en el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993.

- Además de lo anterior, resulta oportuno tener en cuenta que las funciones que se busca establecer en el artículo 5 del proyecto para el defensor de las y los estudiantes son similares a las que ya realiza la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la SED, atendiendo las funciones que describe el Acuerdo 310 de 2022 *“Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito”*.
- El artículo 334 de la Constitución Política establece el principio de sostenibilidad fiscal, que requiere evaluar el impacto fiscal de una disposición legislativa. En concordancia con lo anterior, la Ley 819 de 2003 dispone que las iniciativas que generen algún costo deben indicar expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite *“La fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”*.

A la luz de lo anterior, dado que la iniciativa contempla en su artículo 4 la creación de un equipo de soporte asignado al Defensor de los y las estudiantes con discapacidad, es dable concluir que sería necesario destinar recursos para vincular o contratar a los integrantes de dicho equipo, quienes tendrían que ser personas capacitadas en el desarrollo de las funciones consagradas en la iniciativa legislativa. Derivado de lo anterior, el proyecto de acuerdo debería incluir una fuente de financiación para estas actividades o especificar quién será responsable de su financiamiento.

En razón a lo arriba expuesto, para la SED, el proyecto de acuerdo 603 de 2024 **no es viable** debido a las observaciones planteadas sobre el articulado por esta entidad.

ANÁLISIS TÉCNICO

Una vez revisado el proyecto de acuerdo 603 de 2024, la SED emite concepto de **no viabilidad**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La SED garantiza la atención educativa a estudiantes con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017 y la demás normatividad relacionada con la atención a esta población. En tal sentido, y de conformidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2024 - 2027, en el marco del Objetivo Estratégico 3. *“Bogotá confía en su potencial”*, la SED se ha propuesto que todos los estudiantes accedan a una educación de calidad que les responda. De igual forma, todas sus metas implican un principio de inclusión para disminuir las barreras que puedan encontrar los estudiantes para aprender.

En el marco de los diferentes lineamientos de política, se desarrollan acciones que propenden por el respeto a los estudiantes según sus características, que son reafirmadas por lo definido en la Política Pública de Discapacidad para Bogotá 2023-2034. De igual manera, se realizan acciones articuladas, pertinentes y de calidad para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la educación inclusiva y equitativa, de acuerdo con los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, los cuales plantean un proceso de transformación de la escuela para promover el reconocimiento de la diversidad, el respeto por la diferencia, la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, con el único propósito de avanzar hacia una educación de calidad para todos, a

través de la atención educativa a la población con discapacidad desde el enfoque interseccional con procesos de calidad y pertinencia.

Dicha atención educativa responde al Lineamiento de Política de Educación Inclusiva establecido por la SED, según el cual, en el marco de su misionalidad y de las funciones establecidas en el Decreto 310 de 2022, fortalecerá las orientaciones técnicas y pedagógicas pertinentes para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Estas orientaciones se suman al desarrollo técnico del Ministerio de Educación Nacional – MEN, sobre “*Educación para todas las personas sin excepción - Lineamientos de política para la inclusión y la equidad en educación*”, que precisa los referentes conceptuales que propenden por un sistema educativo colombiano para la inclusión y la equidad, por medio de la implementación de los enfoques que permean la acción educativa y además, orienta los procesos y compromisos de todos y todas, para la consolidación de culturas educativas inclusivas.

En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito **continúa** cumpliendo con lo ordenado en el Decreto 1421 de 2017, de modo que la totalidad de instituciones educativas garanticen el acceso, la permanencia, la participación y el progreso de los estudiantes con discapacidad cursando trayectorias educativas completas. Es importante tener en cuenta que, los estudiantes con discapacidad pueden acceder a cualquier institución educativa oficial, por lo que se puede afirmar que los colegios del Distrito avanzan en la implementación de estrategias educativas inclusivas para la atención de sus estudiantes, teniendo en cuenta sus características, particularidades y necesidades.

En tal sentido, la Secretaría de Educación del Distrito fortalece los procesos de acompañamiento técnico y pedagógico dirigido a las instituciones educativas distritales y Direcciones Locales de Educación, con el objetivo de garantizar las condiciones pertinentes para la atención educativa a estudiantes con discapacidad.

Así las cosas, el presente proyecto de acuerdo, aunque respalda el ejercicio que se viene adelantando en términos de garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, genera costos y algunas de las acciones propuestas en el articulado ya se están adelantando desde la misionalidad de la Entidad.

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO

La Secretaría de Educación del Distrito valora lo establecido en el Proyecto de Acuerdo, específicamente en los artículos 2 y 3, siendo coherente con la misionalidad de la Entidad.

No obstante, considerando las funciones establecidas en el Decreto 310 de 2022, se solicita de manera atenta, revisar los **artículos 1, 4 y 5**:

Comentario:

Es necesario mencionar, desde una mirada técnica, que el defensor debe tener en cuenta los conocimientos técnicos y pedagógicos y la experticia necesaria para contribuir en la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de los y las estudiantes con discapacidad, según lo establecido en el producto del CONPES, 7.2.10. **Sistema de atención que**

responda a las características propias de las poblaciones y grupos de especial protección constitucional, a partir de la incorporación de enfoques y políticas que se implementen en los diferentes niveles de la SED (institucional, local y central), fortaleciendo su capacidad institucional.

Adicional, es importante mencionar que la SED ya hace parte del Consejo Distrital de Discapacidad y de las demás instancias distritales relacionadas con la población con discapacidad. Lo anterior, permite avanzar en la armonización de las acciones que se vienen adelantando en el marco de la política pública hoy vigente.

Así mismo, en clave de la garantía del derecho a la educación sin barreras o discriminación para toda la población escolar, la SED ya viene desarrollando acciones mencionadas en el artículo 5, por lo que esto generaría duplicidad en las funciones, sumado a que este nuevo rol vincula costos adicionales para la Entidad que no se encuentran proyectados en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo.

¿GENERA GASTOS ADICIONALES?

Sí X No

VALORACIÓN DEL GASTO. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique ese gasto adicional a qué corresponde. ¿Pueden ser atendidos por el presupuesto del sector?

Sí No X ¿Por qué?

El gasto adicional será el correspondiente a lo precisado en los artículos 1,4 y 5

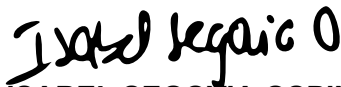
VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada)

Proyecto Viable:

Sí:

NO: X

Atentamente,



ISABEL SEGOVIA OSPINA

Secretaria de Educación del Distrito

Aprobaciones a través de correo electrónico institucional:

Aprobó: Jose Emilio Lemus Mesa, Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Julia María Rubiano de la Cruz, Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.
Revisó: Patricia Camacho Álvarez, Contratista Despacho SED.
Laura León León, Asesora Despacho SED.
Juan David Camacho Piñeros, Asesor Despacho SED.
Laura Juliana Páramo Pérez, Contratista Despacho SED.
José Alejandro Bastidas Rodríguez, Abogado Oficina Asesora Jurídica.
Lindy Díaz, Profesional Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.